ESPAÑA: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS 2015

RESUMEN

El Reino de España es una democracia parlamentaria con una monarquía constitucional. El parlamento es bicameral, las Cortes Generales o Asamblea Nacional, y consiste en el Congreso de los Diputados (cámara baja) y el Senado (cámara alta). Normalmente, el líder del mayor partido político o coalición es nombrado para encabezar el gobierno como presidente del Consejo de Ministros, lo que es equivalente a ser primer ministro. Observadores de las elecciones nacionales del 20 de diciembre las consideraron libres e imparciales. Las autoridades civiles mantuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad.

Los problemas de derechos humanos más importantes incluyeron el retorno forzoso y el maltrato por parte de la policía de personas que buscan asilo, la corrupción sistémica de funcionarios gubernamentales y la violencia contra mujeres y niños.

Otros problemas fueron la difusión de textos de incitación al odio por internet; la promulgación de una nueva ley de seguridad pública que, según sus opositores, viola los derechos humanos; el acoso sexual; la falta de igualdad de oportunidades y de sueldo de las mujeres en los lugares de trabajo; la subyugación de mujeres y niñas a la trata sexual; actos de vandalismo antisemitas; y la discriminación social y la violencia contra personas con discapacidades, musulmanes, minorías étnicas, entre ellas los romaní, y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

En general, el gobierno tomó medidas para enjuiciar a funcionarios que cometieron abusos, tanto en las fuerzas de seguridad como en otros organismos del gobierno. En algunos casos, altos funcionarios participaron en prácticas corruptas y dieron la impresión de impunidad.

Sección 1. Respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a no verse sometida a:

a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

No se tuvo conocimiento de que el gobierno ni sus agentes cometieran ejecuciones arbitrarias ni ilegales.

b. Desaparición

No se denunciaron desapariciones por motivos políticos.

c. Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La Constitución y la legislación prohíben estas prácticas y el gobierno normalmente respetó esta prohibición. Hubo denuncias de maltrato por parte de la policía; los tribunales desestimaron algunas de las denuncias.

Condiciones en las cárceles y los centros de detención

En general, las condiciones en las cárceles y en los centros penitenciarios cumplían las normas establecidas a nivel internacional.

Condiciones físicas: Según la organización no gubernamental (ONG) Coordinadora para la Prevención de la Tortura, entre los detenidos en 2013 (la información disponible más reciente), hubo 47 muertes.

Administración: Por lo general, el gobierno investigó y vigiló las condiciones de las prisiones y los centros de detención.

Vigilancia independiente: En general, el gobierno permitió la vigilancia por parte de observadores independientes no gubernamentales, incluidos la Coordinadora para la Prevención de la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con sus modalidades estándar.

El 9 de abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) publicó un informe sobre su visita al país en julio de 2014. El informe citaba que la falta de una estrategia anti violencia era la razón por la que tenían lugar actos de violencia e intimidación frecuentes entre los detenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (Barcelona).

d. Arresto o detención arbitrarios

La Constitución y la ley prohíben la detención o la prisión arbitrarias y generalmente el gobierno observó estas prohibiciones.

Función de la policía y del aparato de seguridad

Las fuerzas policiales engloban a la Policía Nacional y a la Guardia Civil (ambas gestionan asuntos de migración y de seguridad fronteriza bajo la autoridad del Ministerio del Interior del país) así como las fuerzas policiales bajo la autoridad de los respectivos gobiernos autonómicos de Cataluña y del País Vasco. Las autoridades civiles mantuvieron control eficaz de todas las fuerzas policiales y de la Guardia Civil y, en general, el gobierno posee mecanismos eficaces para investigar y castigar el abuso y la corrupción. Aunque no existieron informes de impunidad que involucraran a las fuerzas de seguridad durante el año, en el 2013, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa destacó que los jueces a menudo desestimaban las alegaciones de maltrato policial y, según consta, pocas investigaciones de maltrato terminaron en condenas. Hubo denuncias aisladas de corrupción que las autoridades procesaron de forma rápida y adecuada.

Procedimientos de arresto y trato durante la detención

La legislación establece que la Policía puede detener a sospechosos con causa probable o con una orden judicial basada en pruebas suficientes, conforme lo determine un juez. En general, las autoridades informaban sin demora a los detenidos sobre los cargos en su contra, y los tribunales dejaban a los acusados en libertad bajo fianza a menos que creyeran que podrían huir o suponían una amenaza para la seguridad pública. Con algunas excepciones, la policía no puede detener a un sospechoso por más de 72 horas sin darle recurso. En ciertos casos poco frecuentes relacionados con casos de terrorismo, la ley permite que las autoridades, con autorización de un juez, detengan a los sospechosos por un período de hasta cinco días antes de la lectura del acta de acusación. El país posee un sistema de fianzas que funciona. Si una posible pena es inferior a tres años, el juez puede decidir si imponer una fianza al acusado o ponerlo en libertad bajo palabra. Si la posible pena es de más de tres años, el juez debe imponer una fianza. La ley ofrece a los detenidos el derecho a los servicios de un abogado que ellos escojan. Si el detenido es indigente, el gobierno designa a un abogado. Sin embargo, a veces la espera era larga entre el momento cuando el detenido solicitaba un abogado y cuando el abogado llegaba al lugar donde se encontraba el detenido.

En ciertos casos poco frecuentes relacionados con actos de terrorismo, un juez puede ordenar la detención en régimen de incomunicación o solitario durante todo el periodo de custodia policial. La ley estipula que los sospechosos de actos terroristas detenidos en régimen de incomunicación tienen derecho a un abogado y

atención médica, pero no les permite escoger abogado ni médico. El abogado de oficio está presente durante las diligencias policiales y judiciales, pero los detenidos no tienen derecho a conversar en privado con él. El gobierno siguió aplicando el amplio uso de la video vigilancia en los centros de detención y en las salas de interrogatorio en gran parte para disuadir el maltrato o cualquier violación de los derechos de los prisioneros por parte de la policía o de los guardias.

En un informe anual al Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura publicado en diciembre de 2014, el Síndic de Greuges de Catalunya (defensor del pueblo) declaró su preocupación por los retrasos innecesarios en el procesamiento de los casos de detención. A veces los detenidos esperan hasta 12 horas para conseguir ayuda legal y hasta 24 horas antes de ver a un juez. El Síndic dijo que el proceso podría ser más rápido que el límite legal de 72 horas.

e. Denegación de juicio público imparcial

La constitución establece un poder judicial independiente y, en general, el gobierno respetó la independencia del poder judicial.

Procedimientos judiciales

La constitución y la legislación establecen el derecho a un juicio imparcial y público y generalmente el poder judicial respetó este derecho. Se presume que los acusados son inocentes y tienen el derecho a recibir información de forma rápida y detallada relativa a los cargos que les han sido imputados, con interpretación gratuita si fuera necesario. Los juicios se llevaron a cabo sin retrasos excesivos. Hay un sistema de jurados de nueve personas. Los acusados tienen derecho a un abogado que ellos mismos escogen. Si el acusado es indigente, el gobierno designa a un abogado. Los acusados y sus abogados tienen suficiente tiempo e instalaciones para preparar la defensa, tienen acceso a pruebas en poder del gobierno, pueden confrontar a los testigos y presentar sus propios testigos y pruebas. No se puede obligar a que los acusados testifiquen o confiesen culpabilidad, y estos tienen el derecho al recurso de apelación. Estos derechos se aplican a todos los acusados sin ningún tipo de discriminación.

Presos y detenidos políticos

No hubo informes de prisioneros o detenidos políticos.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Las personas u organizaciones pueden presentar una demanda civil por daños y perjuicios a causa de una violación de los derechos humanos. El demandante puede también solicitar una determinación administrativa. Las personas pueden apelar las decisiones de los tribunales en las que se planteen supuestas violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de agotar todos los posibles recursos en los tribunales del país.

f. Injerencia arbitraria en la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia

La constitución prohíbe estas acciones, y no hubo informes de que el gobierno no haya respetado estas prohibiciones.

Sección 2. Respeto de las libertades civiles, incluidas las siguientes:

a. Libertad de expresión y de prensa

La constitución garantiza la libertad de expresión y de prensa y, en la práctica, el gobierno en general respetó estos derechos. Una prensa independiente, un poder judicial eficaz y un buen sistema político democrático promovieron en conjunto la libertad de expresión y de prensa.

Libertad de palabra y expresión: La ley prohíbe, sujetos a supervisión judicial, actos como la expresión pública y la publicación de documentos que, según el gobierno, enaltezcan o apoyen el terrorismo. La Fiscalía General del Estado informó que en 2014 hubo 39 condenas en las que 70 personas fueron declaradas culpables. Otras 142 personas se enfrentaron a juicios por delitos relacionados con el terrorismo. La ley dispone penas con prisión de entre uno y cuatro años para personas que provocan discriminación, odio o violencia contra grupos o asociaciones por cuestiones de racismo, antisemitismo o referencias a ideología, religión o creencias, estado familiar, membresía en un grupo étnico o raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad.

Libertad de prensa y de los medios de comunicación: Los medios de comunicación independientes desarrollaron una intensa actividad y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones.

En mayo, organizaciones judías, entre ellas la Comunidad Israelita de Barcelona, l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, el Col·lectiu Israel a Catalunya y la Fundación Baruch Spinoza, solicitaron a los fiscales que investigaran 18.000 supuestos insultos antisemíticos contra judíos e israelíes que se enviaron por Twitter después de un partido de basquetbol el 18 de mayo entre el Maccabi Tel Aviv de Israel y el Real Madrid de España. A final de año las autoridades estaban llevando a cabo investigaciones para identificar a los autores y la ubicación de los delitos.

Censura o restricción del contenido: Los partidos opositores presentaron un recurso al Tribunal Constitucional relativo a la ley de seguridad pública que entró en vigor el 1º de julio. Argumentaron que la ley penaliza las manifestaciones públicas legales. En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró su preocupación en cuanto a la ley y destacó las importantes sanciones pecuniarias impuestas por la ley y la prohibición de filmar a los agentes de seguridad.

Libertad de acceso a internet

El gobierno no impuso restricciones ni perturbó el acceso a internet como tampoco censuró el contenido publicado y no hubo informes fiables de que el gobierno vigilaba las comunicaciones electrónicas privadas sin la supervisión judicial precedente. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estimó que un 76% de la población utilizaba internet. Las autoridades vigilaban sitios web por cuestiones de incitación al odio, al antisemitismo y por terrorismo.

Libertad académica y actos culturales

No hubo restricciones por parte del gobierno en cuanto a la libertad académica o eventos culturales.

c. Libertad de reunión y de asociación pacíficas

Libertad de reunión

La constitución y la legislación prevén este derecho y en general el gobierno lo respetó. En julio, el gobierno adoptó una nueva ley de seguridad pública que incluye multas de hasta 600 euros (US \$660) si no se comunican a las autoridades las manifestaciones pacíficas en lugares públicos, de hasta 30.000 euros (US \$33.000) por manifestaciones que causan la “perturbación grave de la seguridad ciudadana” cerca del parlamento y de edificios gubernamentales

regionales y de hasta 600.000 euros (US \$660,000) por manifestaciones no autorizadas cerca de infraestructuras clave.

Libertad de asociación

La constitución y la legislación prevén este derecho y el gobierno en general lo respetó.

c. Libertad de culto

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto internacional (*International Religious Freedom Report*) en www.state.gov/religiousfreedomreport/.

d. Libertad de circulación, desplazados internos, protección de refugiados y apátridas

La ley prevé la libertad de circulación interna, viajes al extranjero, emigración y repatriación, y en general el gobierno respetó estos derechos. El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para proporcionar protección y ayuda a los desplazados internos, refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y otras personas objeto de preocupación.

Protección de los refugiados

Acceso al asilo: La ley contempla la concesión de asilo o la condición de refugiado y el gobierno ha establecido un sistema para dar protección a los refugiados. La ley permite que cualquier persona extranjera que sea víctima de la violencia de género o de la trata de personas en el país presente una denuncia en una comisaría de policía sin miedo a que la deporten, incluso si esa persona está en el país ilegalmente. Un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio destacó casos en los que las autoridades habían negado acceso a las oficinas de asilo a personas no sirias en Ceuta y Melilla.

Conforme a Eurostat, durante el año hasta julio, el país recibió 5.920 solicitudes de asilo, en comparación con 2.174 solicitudes durante ese mismo periodo en 2014. Durante el año, se les concedió condición de refugiados a 384 personas. En julio, el gobierno acordó aceptar a 1.300 solicitantes de asilo en su mayoría de Irak, Siria y Eritrea, que habían llegado desde Grecia e Italia durante los meses anteriores. En

septiembre, el gobierno acordó aceptar otros 14.931 refugiados que ya se encontraban en Europa, en su mayoría también de Irak, Siria y Eritrea. Para final de año, 12 solicitantes de asilo llegaron al país desde Italia para su reubicación.

Posibles solicitantes de asilo pudieron, de forma efectiva, ejercitar su derecho a presentar solicitudes a las autoridades. Las autoridades otorgaron a una lesbiana, que había escapado persecución en Camerún y a quien en un principio le habían negado asilo, el derecho a permanecer en el país después de que abogados defensores presentaran un recurso a la ECHR, lo que detuvo temporalmente su deportación.

País de origen o tránsito seguro: Las autoridades examinan una por una las solicitudes de asilo y existe un proceso de recursos disponible para los solicitantes que fueron rechazados. Conforme a la ley de la Unión Europea, el país considera que todos los otros países de la zona Schengen, la Unión Europea y los Estados Unidos son países de origen seguros. El gobierno ha suspendido la aplicación del reglamento Dublín III de la Unión Europea por medio del cual los solicitantes de asilo que entran en el país a través de otros países de la zona Schengen son responsables de regresar al país al que primero entraron a la zona Schengen conforme con el reglamento Dublín III de la Unión Europea.

Devolución: El CPT informó que las autoridades habitualmente devolvieron a emigrantes en situación irregular a Marruecos. El informe del CPT declaró que el retorno forzado de emigrantes en situación irregular va en contra de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.

Abusos contra refugiados: En su informe, el CPT declaró que, en el centro de la Zona Franca para el internamiento de inmigrantes en Barcelona, recibió alegaciones tanto de maltrato físico como abuso verbal, especialmente relacionados con ciertos policías, y que recibió alegaciones de insultos por parte de policías en el Centro Aluche en Madrid. El informe del CPT afirmó que el ambiente en ambos centros era parecido al de una cárcel, lo que no era adecuado para personas detenidas conforme a leyes de extranjería. El informe criticó la práctica en ambos centros de dirigirse a los detenidos por su número de detención y no por sus nombres. Las celdas con varios ocupantes no tenían inodoros y se cerraban con llave desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. El informe citó la falta de una estrategia contra la violencia como la razón por la que tenían lugar frecuentes actos de violencia y de intimidación entre los detenidos en el centro de la Zona Franca. En julio el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU

también resaltó como problemáticas las alegaciones de maltrato de inmigrantes por parte de funcionarios gubernamentales y la violencia entre inmigrantes en los centros para el internamiento de los inmigrantes.

En agosto un tribunal en Melilla desestimó acusaciones de abusos de derechos humanos cometidos contra inmigrantes por las fuerzas de seguridad bajo orden de evitar su entrada ilegal al país.

Soluciones duraderas: El gobierno aceptó a refugiados de otros países para su reasentamiento y les proporcionó protección con la asistencia de ONG como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. En julio, el gobierno aceptó a 1.499 emigrantes del programa de reasentamiento de emigrantes de la Unión Europea.

El gobierno asistió a refugiados para el regreso seguro y voluntario a sus hogares.

Protección temporal: El gobierno también proporcionó protección temporal a personas que podían no cumplir las condiciones de refugiado y proporcionó protección secundaria a aproximadamente 285 personas en los primeros dos trimestres del año.

Sección 3. Libertad de participación en el proceso político

La constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a escoger su gobierno por medio de elecciones periódicas, libres e imparciales por sufragio universal y en condiciones de igualdad, y los ciudadanos ejercieron ese derecho.

Las elecciones y la participación política

Elecciones recientes: Observadores consideraron que las elecciones del 20 de diciembre fueron libres e imparciales.

Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

La legislación establece sanciones penales para los casos de corrupción de funcionarios y generalmente el gobierno puso en práctica estas leyes de forma adecuada, aunque los enjuiciamientos y condenas por corrupción no fueron comunes comparadas con el número de denuncias que se presentaron.

Corrupción: Conforme a la Fiscalía General del Estado, en el año 2014 hubo 17 sentencias condenatorias, se abrieron 35 nuevos casos penales (comparados con 55 en 2013) y hubo 340 alegaciones de corrupción.

La constitución garantiza la disponibilidad de un defensor del pueblo que investiga las denuncias de maltrato policial. Desde enero al 17 de agosto, el defensor del pueblo del país presentó 896 denuncias judiciales oficiales, más del doble de las denuncias presentadas en 2014. En 2014, la Defensoría del Pueblo procesó 23.186 denuncias, un ligero aumento de las 22.692 denuncias presentadas en 2013. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas se encargaron de las investigaciones y procesos de casos de corrupción, mientras que la oficina del Secretario de Estado de la Administración General del Estado estuvo a cargo de la elaboración de políticas. Colaboraron eficazmente con la sociedad civil, funcionaron eficaz e independientemente y recibieron recursos suficientes.

Durante los primeros seis meses del año, las fuerzas de seguridad arrestaron a 201 personas en operaciones de anticorrupción.

El 16 de abril, la policía registró la casa y oficina de Rodrigo Rato, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, que también fue ministro de Economía y vicepresidente segundo del gobierno de José María Aznar. El gobierno acusó a Rato de blanqueo de dinero, evasión de impuestos y fraude a raíz de la repatriación de capital al país durante una amnistía fiscal en 2012 que permitió a los evasores de fondos normalizar sus bienes no declarados con un pago único del 10% de su valor. La agencia tributaria identificó a Rato como uno de los 705 casos sospechosos y traspasó el caso al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Competitividad para que llevara a cabo investigaciones adicionales. Rato también estuvo involucrado en un caso que se inició hace casi tres años que examinaba si los ex gerentes de Bankia hicieron declaraciones falsas antes de que el banco cotizara en la bolsa española.

Divulgación de información financiera: Las autoridades públicas están sujetas a la legislación relativa a la declaración financiera y se les exige que cada año publiquen sus ingresos y bienes en sitios web públicos. Hay sanciones para quienes no cumplan con ello. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está a cargo de administrar y aplicar la ley relativa a los conflictos de intereses.

Acceso público a información: La ley establece el acceso público a la información sobre el gobierno. El gobierno aplicó la ley adecuadamente.

Sección 5. Actitud del gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de los derechos humanos

En general, una gran variedad de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron sin restricciones por parte del gobierno, e investigaron y publicaron sus conclusiones sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios públicos cooperaron y se mostraron receptivos a sus puntos de vista.

Organismos gubernamentales de derechos humanos: La función del defensor del pueblo es la de proteger y defender los derechos básicos y las libertades públicas en nombre de los ciudadanos. El partido gobernante nombra al defensor del pueblo después de consultar con la oposición; en general, el defensor del pueblo fue eficaz, independiente, tuvo suficientes recursos y recibió la confianza del público. En 2014, el último año para el cual existe información disponible, el defensor del pueblo inició 23.964 investigaciones (23.186 denuncias, 289 recursos de inconstitucionalidad y 489 casos de su oficina) y concluyó 8.013; otros 5.722 casos estaban pendientes. No le dio seguimiento a 8.565 investigaciones. Además, 12 de las 17 comunidades autónomas tienen una defensoría del pueblo para gestionar casos a nivel regional.

Sección 6. Discriminación, abusos sociales y trata de personas

La ley prohíbe la discriminación por razones de raza, sexo, religión, opinión política, origen nacional o ciudadanía, condición social, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, edad, idioma y condición de VIH positivo o de padecer otras enfermedades contagiosas, y en general el gobierno la hizo cumplir adecuadamente.

Mujeres

Violación y violencia doméstica: La ley prohíbe la violación, también dentro del matrimonio, y en general el gobierno la hizo cumplir adecuadamente. La condena por violación es de entre 6 y 12 años de prisión. La ley también prohíbe la violencia contra las mujeres, y los medios de comunicación independientes y los organismos del gobierno en general le prestaron mucha atención a la violencia de género. La ley establece penas de prisión de entre seis meses y un año para los casos de violencia doméstica, amenazas de violencia o violación de una orden de alejamiento y penas más largas en caso de lesiones graves.

Según la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, para el 30 de junio, parejas o ex parejas habían asesinado a 17 mujeres. La delegada destacó que solo tres de las mujeres fallecidas habían informado de maltrato antes de sus muertes. Según el Consejo General del Poder Judicial, de los 45.955 casos de violencia de género que fueron procesados en 2014, 28.075 recibieron dictámenes de culpabilidad (67% del total). El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género declaró 30.293 denuncias de violencia de género en los primeros tres meses del año.

Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 54 de los 88 asesinatos en 2014 (61%) fueron por violencia de género. Las estadísticas nacionales de homicidios hasta final de marzo –el último mes para el que están disponibles estadísticas nacionales de homicidios– indicaban que los asesinatos por violencia de género representaban el 12% de todos los asesinatos en el país (8 de 66).

Durante el año, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gastó 4,8 millones de euros (US \$5,3 millones) en campañas de concientización en todo el país, un aumento de 1,5 millón de euros (US \$1,7 millones) en comparación con 2014. Este gasto no incluyó el uso por parte de los gobiernos locales de las imágenes de la campaña del ministerio que imprimieron y difundieron por cuenta propia.

La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad operó una plataforma digital donde las unidades que trabajan en la violencia de género podían intercambiar información, mejores prácticas y documentos. Más de 50 oficinas proporcionaron asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica, y había más de 454 centros de acogida para mujeres maltratadas. Una línea telefónica de ayuda nacional gratuita de 24 horas diarias informaba a las mujeres maltratadas sobre los lugares de acogida y otras ayudas locales. La línea de ayuda recibía llamadas en alemán, árabe, búlgaro, chino, español, francés, portugués, rumano y ruso. Hasta final de junio, la línea de ayuda había gestionado 35.714 llamadas telefónicas, aproximadamente 3.400 más que durante el mismo periodo en 2014. El sitio web para el apoyo y la prevención de violencia de género había recibido casi 43,6 millones de visitas para el 30 de junio.

El informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU advirtió que la violencia de género en gran parte no declarada siguió siendo un problema en vista del alto nivel de violencia que sufren las mujeres emigrantes del África septentrional.

En mayo, según el Ministerio del Interior, siete regiones y 97 gobiernos municipales acordaron colaborar en la lucha contra la violencia de género. El Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, durante una ceremonia de firmas en la región de Extremadura, declaró que la iniciativa tenía como objetivo ayudar a que las mujeres se sintieran protegidas por la policía en todo el país. La labor de los gobiernos locales formaría parte de VioGen, un sistema nacional diseñado para coordinar las labores a nivel local y nacional de la lucha contra la violencia de género y de apoyo a las víctimas.

En abril, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desveló su campaña de 2015 contra la violencia de género “Si tu chico te da miedo, cuéntalo. Hay salida a la violencia de género”. En julio la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior anunciaron que compartirían una base de datos para coordinar mejor la lucha contra la violencia de género.

El 8 de julio, el parlamento catalán aprobó la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres por la que se creó el Observatorio de la Igualdad de Género para priorizar la lucha contra la violencia de género.

Mutilación/ablación genital femenina (MGF): La ley prohíbe la MGF y autoriza a los tribunales a enjuiciar a los residentes del país que hayan perpetrado este delito en el país o en cualquier otra parte del mundo. De conformidad con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016, los médicos deben pedir que los padres en el país firmen una declaración en la que prometen que sus hijas no se someterán a la MGF cuando visiten los países donde esta práctica es habitual. Una vez la familia regresa al país, un médico, que puede iniciar un proceso legal contra los padres si cuando examina a las menores averigua que se sometieron a MGF durante el viaje, debe examinar de nuevo a las niñas. Los médicos también deben informar a los padres de las consecuencias sanitarias de la MGF.

Durante el año hasta el 30 de junio, la policía en Cataluña investigó ocho casos de MGF. Un informe de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona dio cuenta de que había más de 6.000 niñas en Cataluña en riesgo de ser sometidas a la práctica.

Acoso sexual: La ley prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo; sin embargo, el acoso siguió siendo reconocido como un problema, aunque pocos casos llegaron a

los tribunales. La pena en casos menores puede ser de entre tres y cinco meses de prisión o multas de entre seis y ocho meses de sueldo. En casos de circunstancias agravantes pueden ser entre cinco y siete meses de prisión o multas de entre 10 y 14 meses de sueldo. El tribunal puede incrementar las penas si decide que la víctima se encuentra en una situación extremadamente vulnerable.

La Ley catalana de igualdad efectiva de mujeres y hombres, adoptada el 8 de julio, hace hincapié en la lucha contra el acoso sexual.

Derechos reproductivos: Las parejas y las personas deciden libremente el número de hijos que quieren tener, cuándo tenerlos y disponen de la información y los medios para lograr el estándar más alto de salud reproductiva sin discriminación, coacción o violencia.

Discriminación: De conformidad con la ley, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, incluidos los derechos basados en el derecho familiar, laboral y de propiedad, nacionalidad y herencia. La ley exige igualdad de pago por el mismo trabajo. Según el sindicato Unión General de Trabajadores, las mujeres tuvieron una representación inferior en puestos de toma de decisiones y ganaban un 22% menos que los hombres por trabajo comparable (ver sección 7.d).

La Ley catalana de igualdad efectiva de mujeres y hombres, adoptada el 8 de julio, hace una llamada para la representación igualitaria en la administración pública, la coeducación en las escuelas, planes de igualdad en grandes empresas y la prohibición de la difusión de contenido sexista en medios de comunicación gubernamentales.

Menores de edad

Inscripción de nacimientos: La ciudadanía se deriva de la de los progenitores. Cuando un menor no adquiere la nacionalidad de sus progenitores, el país podrá concedérsela.

Maltrato de menores: Hasta el mes de octubre, la violencia de género dejó huérfanos a 39 niños, según informó el Observatorio contra la violencia doméstica y de género. Conforme a la ONG Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, los malos tratos de niños y adolescentes se redujeron, comparados con el año 2013. En 2014 la NGO recibió 363.183 llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se denunciaba violencia infantil, comparados con los 424.171 en 2013.

En julio, el Ministerio de Justicia desestimó el recurso de Ángela González, y rehusó compensarla, ya que argumentó que la decisión del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a favor de González no era vinculante para el gobierno, y recalcó que no existía evidencia de que hubiera error en la decisión original. González había llevado a juicio al gobierno por no proporcionarle protección, enjuiciamiento y compensación después de que su ex pareja asesinara a su hija Andrea de siete años en 2004. El Comité había emitido un fallo a su favor. Los abogados de González anunciaron que seguirían presentando recursos a los tribunales locales.

Matrimonio forzado y a edad temprana: La edad mínima para el matrimonio es los 16 años para los menores que viven por su cuenta.

Una reforma del código penal aprobada en enero califica el matrimonio forzado como un delito punible con entre seis meses y tres años y seis meses de prisión. El matrimonio forzado conlleva sanciones parecidas que, hasta ahora, la ley calificaba de coacción. Grupos de inmigrantes del Oriente Medio y África septentrional, y los romanís de Rumanía, a menudo celebraron matrimonios forzados. Pueden ser difíciles de identificar y enjuiciar si tienen lugar dentro de familias.

En diciembre de 2014 el gobierno regional catalán, la policía regional y otras entidades locales aprobaron un protocolo para luchar contra el matrimonio forzado en la provincia de Gerona. El protocolo, el primero de este tipo en el país, de forma holística, hace hincapié en la prevención, detección, asistencia, denuncia, vigilancia y protección de las víctimas. Para el 30 de junio, la policía catalana había asistido a 11 víctimas del matrimonio forzado, seis de los cuales involucraron a menores.

Explotación sexual de menores: La ley penaliza “las agresiones y el abuso sexual de menores” de 13 años. La pena por agresión y abuso sexual de menores de 13 años es prisión de dos a 15 años, según el tipo de delito. Las personas que se comuniquen por internet con menores de 13 años con el propósito de explotarlos sexualmente se enfrentan a una condena de uno a tres años de prisión.

La edad mínima para mantener relaciones sexuales consentidas en el país es de 16 años, conforme a la reforma del código penal que entró en vigor el 1 de julio. La ley define como abuso sexual no consentido aquellos actos sexuales que se ejecutan sobre personas menores de 16 años e impone una pena de prisión de dos a 15 años, según las circunstancias.

La pena por reclutar a menores o personas con discapacidades para que se prostituyan es prisión de uno a cinco años. Si es un menor de 13 años, el periodo de encarcelamiento es de cuatro a seis años. La misma pena se aplica a quienes intentan victimizar a los menores por medio de la prostitución. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor recibirá una pena de prisión de cuatro a seis años. Si es menor de 13 años, el periodo de prisión es de cinco a 10 años.

La explotación sexual comercial de niñas adolescentes víctimas de la trata de personas siguió siendo un problema.

La ley prohíbe la pornografía infantil. El Código Penal penaliza utilizar a menores “para elaborar cualquier clase de material pornográfico” y producir, vender, distribuir, exhibir o facilitar la producción, venta, difusión o exhibición de pornografía infantil de “cualquier tipo” y por “cualquier medio”. Reclutar a menores o personas con discapacidades y utilizarlos para la pornografía se castiga con uno a cinco años de prisión; si la víctima es menor de 13 años la condena es de cinco a nueve años. La ley también penaliza la posesión intencionada de pornografía infantil que conlleva una posible pena de prisión de hasta un año. La producción, venta o difusión de pornografía conlleva una pena de prisión de uno a cuatro años si se utiliza a un menor de 18 años y una pena de prisión de hasta ocho años si se utiliza a un menor de 13 años.

En julio, el parlamento aprobó la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia en la que se contempla la creación de un registro central de delincuentes sexuales que les prohíba participar en actividades donde podrían estar presentes los menores de edad.

Sustracción internacional de menores: El país es signatario del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, firmado en La Haya en 1980. Para obtener más información, ver el informe del Departamento de Estado de los EE. UU. sobre cumplimiento en travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html e información específica por país en travel.state.gov/content/childabduction/en/country/spain.html.

Antisemitismo

Hay aproximadamente unas 48.000 personas que pertenecen a la comunidad judía. Los descendientes de los judíos sefarditas que fueron expulsados del país hace 500 años tienen derecho a regresar como españoles de derecho.

De acuerdo con líderes de la comunidad judía y la ONG Movimiento contra la Intolerancia, seguían produciéndose actos antisemitas, como pintadas en entidades judías, aunque la violencia contra personas de dicha comunidad era poco frecuente. Según el Ministerio del Interior se registraron 24 casos de antisemitismo en 2014 (2% de todos los delitos motivados por el odio), un incremento de los cuatro que tuvieron lugar en 2013. Los organismos gubernamentales promueven el pluralismo religioso, la integración y la comprensión de las comunidades y la historia judías, pero su difusión no llegó a todas las comunidades autónomas del país.

El Observatorio de Antisemitismo en España informó que siguen existiendo prejuicios firmemente arraigados. El Observatorio informó de 42 acontecimientos antisemitas en 2014, en su mayor parte declaraciones impresas o en los medios audio-visuales (22), y con menos alcance daños a bienes. La violencia física contra personas casi no existió (un caso), y el Observatorio identificó siete casos de antisemitismo que fueron parte del discurso público.

En abril, la Guardia Civil arrestó a un grupo neo-nazi que había pintado una pared con símbolos neo-nazis y “Adolf Hitler tenía razón”. En mayo las autoridades arrestaron a un extranjero de 28 años en Ribaforada por incitar por internet a asesinar a judíos. Un tuit antisemita por el funcionario de cultura de la ciudad de Madrid, Guillermo Zapata, se hizo público el 13 de junio. El mensaje originalmente publicado en 2011 que fue re-tuiteado decía: “¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un [coche pequeño]? En el cenicero.”

El 17 de agosto, los organizadores del festival Rototom Sunsplash en Benicassim (provincia de Castellón; región de Valencia) en un principio cancelaron un concierto a cargo del cantante judío estadounidense Matisyahu después de que los presionara el “BDS País Valencià,” que se describe como miembro del movimiento de boicot, desinversión y sanción (BDS) contra Israel. La campaña para echar al cantante empezó el 9 de agosto después de que BDS País Valencià publicara una carta abierta instando a que el concierto de Matisyahu se cancelara debido a que el artista participaba en festivales proionistas y había dicho que Palestina no existe. Matisyahu, a través de su página en Facebook el 18 de agosto, describió seguir recibiendo presión por parte de los organizadores del festival para que hiciera un pronunciamiento explícito sobre el conflicto palestino-israelí para “tranquilizar a las personas del BDS”. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones

Exteriores emitió una declaración en la que condenaba la decisión inicial de los organizadores. A los dos días, los organizadores dieron marcha atrás y volvieron a invitar al cantante.

Trata de personas

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

Personas con discapacidades

La ley prohíbe, con multas de hasta un millón de euros (US \$1,1 millón), la discriminación de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales en el empleo, la educación, el transporte aéreo y otros tipos de transporte, el acceso a la atención sanitaria y la prestación de otros servicios públicos. En general, el gobierno hizo cumplir estas disposiciones adecuadamente. De los 1.285 delitos motivados por el odio declarados en 2014, 199 fueron perpetrados contra personas con discapacidades (15,5%).

La ley exige el acceso a los edificios para las personas con discapacidades. Aunque en general el gobierno aplicó estas disposiciones, los niveles de asistencia y accesibilidad fueron distintos según la región.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

Según información del Ministerio del Interior, durante los primeros ocho meses del año, la policía registró un total de 57 delitos motivados por el odio, 18 (32%) de los cuales estaban relacionados con el racismo. El 14 de abril, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz informó que se habían producido 1.285 delitos motivados por el odio en 2014, 9,6% más que en 2013. El ministro declaró que el aumento se debía en parte a mejores medidas para la recolección de datos. De este total, 475 estuvieron vinculados al racismo (37%). Andalucía, Cataluña, Valencia y el País Vasco fueron las regiones que tuvieron las mayores cantidades de delitos de odio, según los datos del ministerio.

En junio de 2014, el fiscal de la provincia de Barcelona para delitos motivados por el odio presentó una denuncia contra los presidentes de los partidos españoles Alianza Nacional y la Falange Española por incitar a la violencia. Durante una manifestación en Barcelona en 2013, estos partidos políticos hicieron un llamamiento a la violencia contra los grupos catalanes pro-independentistas.

En su informe de 2014, la Defensoría del Pueblo indicó que la Policía Nacional suspendió el control policial de motivación racial, pero destacó que la Policía Municipal de Madrid seguía utilizando la práctica.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó el establecimiento de perfiles por parte de la policía, sobre todo de la población romaní. El informe declaraba que los inmigrantes y las minorías étnicas se enfrentaban a la discriminación en la vivienda, la educación, el empleo y la sanidad.

Según la Fundación Secretariado Gitano (FSG), una de las ONG más grandes que trabaja con la población romaní en el país, el 94% de los niños romanís ahora empiezan a ir al colegio a la edad obligatoria de tres años, y más del 96% de ellos finaliza la educación primaria, pero las tasas de abandono escolar en la educación secundaria todavía eran del 64% en 2013, más del doble del promedio nacional. Asimismo, el 91% de la población romaní en el país estaba alfabetizada, un aumento de casi el 5% durante los últimos 10 años, según la FSG. Pero, la FSG también destacó que, a pesar de los muchos éxitos logrados, la población romaní seguía estando marginalizada, y eran más pobres cuando se les comparaba con otros españoles. Entre las razones de estas circunstancias se encontraban las altas tasas de abandono escolar, falta de acceso al mercado laboral y el uso disparado de la atención sanitaria universal. El informe anual de la FSG de 2014 citó 151 casos de discriminación contra los romanís.

Abusos sociales, discriminación y actos de violencia motivados por la orientación sexual y la identidad de género

El colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) estaba ampliamente aceptado en todo el país. La ley prohíbe la discriminación en el empleo. La ley puede considerar un elemento de odio hacia el colectivo LGBTI como una circunstancia agravante en los delitos.

En Cataluña la ley proporciona a los miembros del colectivo LGBTI más protecciones que la ley nacional y prohíbe la discriminación en función de la sexualidad en sectores del gobierno regional como la prestación de servicios de educación y sanitarios. Invierte la carga de la prueba en casos de discriminación en los ámbitos de derecho civil y social.

Los consulados del país inscriben en el registro civil a los hijos nacidos por maternidad subrogada.

Según el Ministerio del Interior, de los 57 delitos motivados por el odio durante los primeros ocho meses del año, dos (4%) estaban vinculados a la orientación sexual de la víctima. De los 1.285 delitos motivados por el odio registrados en 2014, 513 (40% de los casos) se centraron en personas LGBTI. La asociación LGBTI Arcópoli también afirmó que la mayoría de los agresores tenían menos de 30 años.

Las asociaciones de personas LGBTI reclamaron que la homofobia entre personas de 16 a 20 años iba en aumento. Según el Observatori Contra l'Homofòbia de Catalunya, cinco menores agredieron a personas homosexuales durante la primera mitad del año.

El gobierno luchó contra los delitos motivados por el odio dirigidos a personas LGBTI por medio de la concientización de la policía y de los trabajadores sociales relativa a la diversidad sexual, una mayor sensibilización de los delitos motivados por el odio dirigidos a las personas LGBTI, la presentación más fácil de denuncias y la provisión de mejor asistencia a las víctimas de estos delitos. Al utilizar un enfoque del gobierno en su conjunto, este canalizó sus labores sobre este asunto por medio del Observatorio español contra la LGBTfobia, una iniciativa formulada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales y con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio del Interior.

Otras formas de violencia o de discriminación sociales

Según datos del Ministerio del Interior, durante los primeros ocho meses del año, la policía registró un total 57 delitos motivados por el odio, 23 (40%) de los cuales fueron contra musulmanes. De los 1.285 delitos motivados por el odio que fueron declarados en 2014, 63 casos fueron contra musulmanes (5%).

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. Libertad de asociación y derecho de negociación colectiva

La ley permite que la mayoría de trabajadores, incluidos los extranjeros y todos los trabajadores inmigrantes, funden sindicatos independientes y se afilien al de su elección sin autorización previa ni requisitos excesivos. Sin embargo, el personal militar y las fuerzas policiales nacionales no tienen derecho a afiliarse a sindicatos

y los jueces, los magistrados y los fiscales no son libres de afiliarse al sindicato de su elección. La ley permite que los sindicatos lleven a cabo sus actividades sin interferencia.

La ley prevé el derecho a la negociación colectiva, incluyendo a todos los trabajadores del sector público a excepción del personal militar. La negociación colectiva del sector público incluye los salarios y los niveles de empleo, pero el gobierno retuvo el derecho a fijarlos si fracasaban las negociaciones.

La constitución y la ley prevén el derecho a la huelga, y los trabajadores ejercitaron este derecho al realizar huelgas legales. Cualquier sindicato en huelga debe respetar los requisitos de servicios mínimos negociados con el empleador correspondiente. La ley y los reglamentos prohíben las represalias contra los huelguistas, y la discriminación contra sindicatos y la discriminación en función de actividades sindicalistas son ilegales, y estas leyes se aplicaron debidamente. De conformidad con la ley, si un empleador viola los derechos sindicales o el derecho a llevar a cabo huelgas legales o deniega la participación de un empleado en un sindicato, el empleador podría enfrentarse a entre seis meses y dos años de prisión o una multa si no reincorpora al empleado. Esas sanciones fueron suficientes para prevenir las violaciones.

Los trabajadores se organizaron y se afiliaron a sindicatos de su elección libremente. En general, el gobierno no se interpuso en el funcionamiento de los sindicatos. Los acuerdos de negociación colectiva cubrieron aproximadamente el 80% de la fuerza laboral en los sectores público y privado desde finales de año. A veces, los empleadores utilizaron los requisitos de servicios mínimos para socavar las huelgas planificadas y garantizar los servicios en ámbitos críticos como en el transporte o los servicios sanitarios.

Aunque la ley prohíbe la discriminación sindical por parte de empleadores de trabajadores y organizadores sindicalistas, los sindicatos afirman que los empleadores discriminaron en muchos casos cuando rechazaron renovar los contratos temporales de trabajadores que participaban en la organización de sindicatos.

b. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe todo tipo de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el infantil.

El gobierno aplicó la ley adecuadamente. Siguió utilizando medidas de prevención, aunque estuvieron más centradas en la prostitución forzosa que en el trabajo forzoso. Los recursos y las inspecciones fueron adecuados, pero el gobierno no realizó nuevas campañas de sensibilización relacionadas con el trabajo forzoso. Las penas de cinco a 12 años de prisión fueron lo suficientemente severas para prevenir violaciones.

Los empleadores sometían a hombres y mujeres emigrantes al trabajo forzoso en el servicio doméstico, la agricultura, la construcción y la industria de servicios. Los menores no acompañados seguían siendo especialmente vulnerables a la explotación laboral, a la trata sexual y a la mendicidad forzosa.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

c. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para trabajar

La edad mínima legal para que un menor pueda ser contratado es de 16 años. La ley prohíbe también que los menores de 18 años trabajen por la noche, realicen horas extraordinarias o trabajen en sectores considerados peligrosos, como en los sectores agrícola, minero y de la construcción. Las leyes y las políticas proporcionan protección a los menores en cuanto a la explotación en el empleo y, en general, estas leyes se aplicaron.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el principal responsable de hacer respetar la edad mínima establecida por la ley, y aplicó la ley adecuadamente en las principales industrias y el sector de servicios.

El ministerio tuvo dificultad para aplicar la ley en explotaciones agrícolas pequeñas y en empresas familiares, en las que siguió existiendo algún tipo de trabajo infantil. El gobierno aplicó adecuadamente las leyes que prohíben el trabajo infantil en las zonas económicas especiales. En 2013, el último año para el que se dispone de información, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social detectó 13 violaciones relacionadas con el trabajo infantil, que afectaron a 13 menores. El encarcelamiento de seis a 10 años fue una de las sanciones aplicables y fue suficiente para evitar violaciones.

Hubo informes de que delincuentes sometieron a menores a la trata de sexo comercial y a mendicidad forzosa. Las bases de datos policiales no inscriben automáticamente a menores extranjeros que son interceptados en las fronteras, lo

que los hace vulnerables a la explotación, incluida la mendicidad forzosa y la explotación sexual comercial (ver sección 6, Menores de edad).

d. Discriminación relativa al empleo y a la profesión

La legislación y los reglamentos laborales prohíben la discriminación relacionada con el empleo y la profesión en función de la raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o ciudadanía, condición social, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, edad, idioma y condición de VIH positivo o de padecer otras enfermedades contagiosas. La sanción por violar la ley es de seis meses a dos años de prisión. Si bien el gobierno aplicó estas leyes y reglamentos, la discriminación en el empleo y la profesión tuvo lugar en cuanto a la raza y etnicidad, género y orientación sexual (ver sección 6). El gobierno requiere que las empresas con más de 50 trabajadores reserven el 2% de sus puestos para personas con discapacidades.

e. Condiciones de trabajo aceptables

El salario mínimo nacional era de 648,60 euros (US \$713.46) mensuales, el equivalente a 7.783 euros (US \$8.561) anuales. Para una familia de dos adultos y dos hijos, el nivel de pobreza en 2014 se estableció en 16.718.60 euros (US \$18.390,46) anuales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplicó adecuadamente el salario mínimo.

La ley prevé una semana laboral de 40 horas, con un periodo de descanso sin interrupción de 36 horas después de haber trabajado 40. La ley restringe las horas extra a 80 por año a menos que un convenio colectivo establezca un nivel distinto. La paga por horas extra es obligatoria y debe ser igual o mayor que la paga normal. La ley prevé 22 días de vacaciones anuales y 14 días festivos oficiales nacionales.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene la responsabilidad técnica de elaborar normativa para la seguridad y salud ocupacionales. La ley protege a los trabajadores que se retiran de situaciones que podrían poner en peligro su salud o seguridad sin poner en riesgo su empleo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social es responsable de aplicar la ley sobre la normativa relativa a la seguridad y salud ocupacionales por medio de inspecciones y medidas judiciales cuando los inspectores encuentran infracciones. A final de 2013, había 1.844 inspectores laborales en el país. En 2013, hubo 65.584

infracciones equivalentes a 321.768.000 de euros (US \$353.944.800) en sanciones cuyo promedio fue de 4.906 euros (US \$5.397) por sanción. Las sanciones no fueron suficientes para evitar las violaciones. Los sindicatos criticaron al gobierno por dedicar recursos insuficientes a la inspección y aplicación. En mayo, Visa Inc. calculó que el sector de la economía informal equivalía a 196.000 millones de euros (US \$216.000 millones) o 18,6% del producto nacional bruto. A final de 2013, el sistema de la seguridad social tenía inscritos a 423.800 de los estimados 680.000 empleados del hogar. El resto del cálculo total estimado seguía fuera de la economía formal.

Hasta mayo, el Instituto Nacional de Estadística registró 179.091 accidentes laborales. Las autoridades informaron que 177.596 de estos habían sido menores, 1.296 graves y 199 mortales.